Área de Transcripciones

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2024

COMISIÓN CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO
14.^a SESIÓN ORDINARIA
(Matinal)
(DOCUMENTO DE TRABAJO)

MARTES 18 DE MARZO DE 2025
PRESIDENCIA DEL SEÑOR FERNANDO ROSPIGLIOSI CAPURRO

—A las 10:00 h, se inicia la sesión.

El señor PRESIDENTE.— (Audio iniciado) ...de marzo de 2025, se va a pasar lista para verificar el *quorum*.

Sírvanse, señores congresistas, responder presente al llamado de sus apellidos que realizará la secretaria técnica.

Proceda, señora secretaria técnica.

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista:

Con su venia, señor presidente.

Rospigliosi Capurro.

El señor ROSPIGLIOSI CAPURRO (FP).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Rospigliosi Capurro, presente.

Aragón Carreño (); Aragón Carreño (); Camones Soriano (); Camones Soriano (); Aguinaga Recuenco (); Aguinaga Recuenco (); Juárez Gallegos (); Juárez Gallegos (); Moyano Delgado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Moyano Delgado, presente.

Alegría García (); Alegría García (); Lizarzaburu Lizarzaburu (); Elías Ávalos.

El señor ELÍAS ÁVALOS (APP).— Presente, señora secretaria, José Luis Elías, presente. Buenos días, presidenta.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Elías Ávalos, presente.

Calle Lobatón.

La señora CALLE LOBATÓN (PP).— Calle Lobatón, presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Calle Lobatón, presente.

Juárez Calle (); Juárez Calle (); Luna Gálvez (); Luna Gálvez ().

Se da cuenta de la licencia presentada por el congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas con licencia.

Del mismo modo, se da cuenta de la licencia del congresista Balcázar Zelada. Balcázar Zelada con licencia.

Mita Alanoca.

El señor MITA ALANOCA (PL).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Mita Alanoca, presente.

Muñante Barrios.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Muñante Barrios, presente.

Herrera Medina (); Herrera Medina ().

La congresista Herrera Medina manifiesta su asistencia a través del chat de la plataforma. Herrera Medina, presente.

Soto Palacios.

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Soto Palacios, presente.

Paredes González.

El señor PAREDES GONZALES (BM).— Paredes González, presente.
Buen día.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Paredes González, presente.

Quiroz Barboza.

El congresista Quiroz Barboza manifiesta su asistencia a través del chat de la plataforma. Quiroz Barboza, presente.

Williams Zapata.

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Williams Zapata, presente.

Tudela Gutiérrez (); Tudela Gutiérrez (); Cavero Alva (); Cavero Alva (); Cutipa Ccama.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Cutipa Ccama, presente.

Valer Pinto (); Valer Pinto (); Morante Figari.

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Morante Figari, presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Morante Figari, presente.

Flores Ramírez.

El señor FLORES RAMÍREZ (BS).— Flores Ramírez, presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Flores Ramírez, presente.

Echaíz de Núñez Izaga.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (HYD).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Echaíz de Núñez Izaga, presente. (2)

Luque Ibarra.

La señora LUQUE IBARRA (BDP).— Presente, Luque Ibarra.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Luque Ibarra, presente.

Segundo llamado a los congresistas titulares de la comisión.

Aragón Carreño (); Camones Soriano (); Aguinaga Recuenco.

El congresista Aguinaga Recuenco manifiesta su asistencia a través del chat de la plataforma. Aguinaga Recuenco, presente.

Juárez Gallegos.

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Juárez Gallegos, presente.

Alegría García.

El señor ALEGRÍA GARCÍA (FP).— Alegría, presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Alegría García, presente.

Lizarzaburu Lizarzaburu (); Juárez Calle ().

La SECRETARIA TÉCNICA.— Lizarzaburu Lizarzaburu, presente.

Juárez Calle (); Luna Gálvez (); Tudela Gutiérrez (); Cavero Alva (); Valer Pinto ().

Se va a proceder a llamar asistencia a los congresistas accesitarios de los congresistas titulares que no han respondido al llamado:

Vergara Mendoza (); Alva Prieto (); Espinoza Vargas (); Tello Montes (); Amuruz Dulanto (); Jeri Lloré. Cordero Jon Tay, Luis Gustavo (); Azurín Loayza (); Pazo Nunura ().

Señor presidente, habiendo culminado con el llamado de asistencia de los señores congresistas, se tiene registrado 20 congresistas presentes, 2 licencias. El *quorum* para la presente sesión es de 15 congresistas. Usted cuenta con el *quorum* reglamentario para dar inicio a la presente sesión.

El señor PRESIDENTE.— Gracias.

Con el *quorum* reglamentario, siendo las diez horas con siete minutos del martes 18 de marzo de 2025, reunidos de manera presencial en el Hemiciclo del Congreso y de manera virtual a través de la plataforma *Microsoft Teams*, se da inicio a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Aprobación del acta.

Señores congresistas, ha sido remitido a su despacho, junto con la citación a la presente sesión, el Acta de la Undécimo Tercera Sesión Ordinaria de la comisión, realizada el martes 11 de marzo de 2025. Si no hay ninguna observación, se dará por aprobada.

El acta ha sido aprobada.

DESPACHO

El señor PRESIDENTE.— Los documentos recibidos y remitidos han sido enviados a su despacho junto con la citación.

Si algún congresista desea copia de alguno de ellos, lo puede solicitar al personal de la comisión.

Informes

El señor PRESIDENTE.— Si algún congresista desea realizar algún informe, puede solicitar el uso de la palabra.

No habiendo más informes, pasamos a la sección pedidos.

Pedidos

El señor PRESIDENTE.— Si algún congresista tuviera algún pedido que formular, puede hacerlo en estos momentos.

Yo tengo un pedido. Solicito que en base al artículo 77 del Reglamento del Congreso, la comisión acuerde pedir al Consejo Directivo que derive a nuestra comisión el Proyecto de Ley número 10504-2024-CR, *Ley para el registro de perfiles genéticos del Sistema Criminalístico Policial*, en razón que involucra temas relacionados a derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, tales como el derecho a la dignidad humana, el derecho a la intimidad personal, el derecho a la integridad personal y el derecho a la identidad.

Cabe precisar, que dicho proyecto de ley ha sido derivado de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, como primera comisión, y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como segunda comisión. Sin embargo, se ha omitido su remisión a nuestra comisión, pese a contener materias vinculadas a los derechos fundamentales. En tal sentido, solicito que adoptemos el acuerdo de pedir al consejo directivo que derive este proyecto 1504 a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la

República, como tercera comisión especializada, para su respectivo análisis y estudio.

Si algún congresista desea intervenir al respecto, se le da el uso de la palabra.

Pedidos

El señor PRESIDENTE.— Pedidos.

Es pedido para que apruebe esta comisión.

El señor VALER PINTO (SP).— Presidente.

El señor PRESIDENTE.— ¿Sí?

El señor VALER PINTO (SP).— Presidente, una solicitud, congresista Valer, por favor.

El señor PRESIDENTE.— Sí, pero primero estamos viendo este pedido.

Si hay alguna opinión al respecto.

No habiendo más intervenciones **(3)** y si no hay oposición, se da por aprobado.

Tiene la palabra el congresista Valer.

El señor VALER PINTO (SP).— Muchas gracias, presidente. Muy buenos días con todos.

Presidente, disculpe usted, estuve en la Comisión de Presupuesto sustentando un proyecto de ley. No solicité la asistencia a esta comisión, no sé si usted me permite, por favor, tomar mi asistencia.

Muchísimas gracias. Muy amable.

El señor PRESIDENTE.— Está registrada, congresista.

El señor VALER PINTO (SP).— Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Si no hay más pedidos, pasamos al Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

El señor PRESIDENTE.— Como primer punto de Agenda, tenemos el debate y votación del predictamen recaído en los Proyectos de Ley 8324/2023-CR, 10417/2024-CR, que proponen la Ley que modifica la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil con la finalidad de proteger la identidad y seguridad personal. El presente predictamen se ha elaborado en base a los proyectos de ley de los congresistas Carlos Zeballos Madariaga y Alejandro Aguinaga Recuenco. Sin embargo, luego de la mesa técnica que hemos desarrollado sobre la materia y las coordinaciones que hemos realizado con el Reniec, presentamos un texto sustitutorio que está orientado

básicamente a eliminar tres datos sensibles del Documento Nacional de Identidad.

1. La impresión de la huella dactilar.

2. La firma.

Y, 3. La dirección domiciliaria.

Y, adicionalmente, la creación del registro de huellas dactilares dañadas o maltratadas.

Antes de sustentar cada una de estas propuestas, deseo resaltar que el Proyecto de Ley 8324/2023-CR, planteaba crear un marco normativo que proteja la identidad y establezca lineamientos de ciberseguridad financiera en el Perú, así como la eliminación de la huella dactilar y la firma del DNI. Sin embargo, advertimos que los aspectos de ciberseguridad financiera ya cuentan con un marco normativo que comprende la Ley 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en el país, el Decreto Legislativo 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, la Ley 29733, que protege los datos personales, la Resolución de la SBS 504-2021, entre otras normas, motivo por el cual las opiniones iniciales que se recibieron sobre dicho proyecto fueron en su contra.

Por ello, el predictamen que presentamos se centra básicamente en la parte referida a la eliminación de los datos sensibles de la persona como una medida que contribuya a reducir la exposición de la identidad y la seguridad personal frente a los riesgos de la inseguridad ciudadana y los delitos vinculados al robo de identidad, fraudes, clonaciones, extorsiones, secuestros, entre otras amenazas que vienen afectando cada vez en mayor proporción de la población y a la paz y tranquilidad del país.

Cabe precisar, que esta propuesta encuentra sustento constitucional en el artículo 2, inciso 1, 6 y 24 de la Constitución Política del Perú, que garantizan el derecho de toda persona a su identidad, a su seguridad personal y a que los servicios informáticos, públicos o privados no suministren información que afecte a la intimidad personal y familiar.

El Documento Nacional de Identidad actual expone datos sensibles que son utilizados por delincuentes no solo para realizar transacciones fraudulentas, sino también para ubicar y extorsionar a los ciudadanos, llegando incluso a causarle la muerte como venimos viendo. Tanto es así que existen múltiples reportes de clonación de huellas dactilares mediante materiales sintéticos, permitiendo la extracción de dinero de cuentas e incluso préstamos en entidades bancarias sin la autorización del titular. Además de extorsiones y robos de inmuebles cuya dirección domiciliaria ha sido extraída del DNI.

Para centrarnos aún más en la problemática, es importante precisar que en la actualidad la identidad de las personas abarca

también el plano digital, donde ha cobrado una importancia sin precedentes, facilitando el acceso a servicios financieros, trámites y múltiples plataformas digitales. Sin embargo, su vulnerabilidad ha propiciado un incremento en delitos como la suplantación de identidad, fraudes bancarios y accesos no autorizados a información personal.

En ese sentido, se han identificado factores que ponen en riesgo tanto la seguridad personal de los ciudadanos, así como la seguridad de sus datos de identificación. Por ello, esta reforma busca garantizar la protección de la identidad personal y digital, así como la seguridad de las personas, eliminando estos datos sensibles del DNI físico y adoptando estándares de seguridad para el resguardo de datos personales.

Ahora bien, a fin de no privar del acceso a la información de estos datos sensibles a las personas o entidades públicas o privadas que por la naturaleza de sus funciones requieren del conocimiento o verificación de dichos datos como son para las actividades comerciales, financieras, notariales, judiciales, fiscales, policiales o registrales, se está disponiendo que el Reniec implemente medidas técnicas adecuadas para asegurar su disponibilidad y correcta administración a través de los canales de **(4)** acceso a la información que disponga en el reglamento de la ley, asegurando la trazabilidad de quien solicita y accede a dichos datos personales.

De esta manera, la firma, la huella dactilar y la dirección domiciliaria se seguirán registrando y actualizando en el Registro Único de Identidad de las Personas Naturales del Reniec, pero ya no aparecerán impresos en el DNI y su acceso será disponible a través de los canales de acceso a la información que habilita el Reniec a través del uso de tecnología de cifrado y sistemas de autenticación para garantizar la privacidad y seguridad de los datos, tales como chips, biometrías, certificados digitales, entre otros.

En síntesis, esta propuesta tiene los siguientes beneficios:

Un mayor resguardo de datos personales, reduciendo la exposición innecesaria de información en documentos físicos.

La prevención de fraudes y suplantación, minimizando el uso indebido de las huellas dactilares y firmas.

Y, la alineación con estándares internacionales de ciberseguridad, modernizando los mecanismos de autenticación en el país.

Finalmente, la propuesta del congresista Alejandro Aguinaga, plasmada en su Proyecto de Ley 10417/2024-CR, se está incorporando como función del Reniec la implementación, organización y supervisión del registro de huellas dactilares dañadas o maltratadas, a fin de garantizar el acceso de las

personas que encuentran dificultades con la identificación biométrica a trámites y servicios, como por ejemplo en bancos y notarías.

Reitero una vez más, que hemos estado en constante coordinación con el Reniec a fin de adoptar medidas que refuercen la seguridad personal, reduzcan la vulnerabilidad y garanticen una identificación más eficiente y protegida para todos los ciudadanos, estando esta entidad de acuerdo con la presente propuesta de modificación.

Quiero terminar esta sustentación citando la frase de George Bernard Shaw: "el progreso es imposible sin el cambio y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada". Seamos parte de este importante cambio en beneficio de la protección de la identidad y seguridad de todos los peruanos.

Realizada la sustentación del dictamen, tienen la palabra los congresistas que deseen intervenir, empezando por la congresista Gladys Echaíz.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (HYD).— Gracias, presidente.

Creo que el sustento del documento es la seguridad ciudadana, ¿verdad? Garantizar la seguridad ciudadana. Y precisamente, como una garantía de la seguridad ciudadana, de los derechos de los ciudadanos, especialmente el de propiedad, el de identidad, es que me parece que habría que atender las recomendaciones de las instituciones, incluyendo el Reniec, cuya opinión es desfavorable, al menos la que consta acá por escrito.

A ver, en el Ministerio Público, para los efectos de determinar la identidad de los detenidos, que generalmente se paran cambiando de nombre, se entra en línea a la Reniec para ver firma y huella digital. Si ahora el DNI ya no va a tener eso, mientras hacen el requerimiento para acreditar la identidad, o en el caso de las homonimias, para ver cuándo nació, de qué talla, quién es su padre, quién es su madre, etcétera, el tema se va a complicar y puede estarse dando libertad o detención a personas distintas de las que corresponde.

En el caso de la... por decir, cuando uno va a realizar un acto notarial, si quiero dar un poder, generalmente es la huella y la firma y la identidad a través del, no sé cómo se llama, de una fotografía que se conecta a la Reniec. Si ya no vamos a tener esto, entonces va a dificultar más el problema y puede comenzar con el tema de la venta de las propiedades con poderes falsificados, como se ha dado hace tiempo y proliferó, tanto que hay 50 000 procesos provenientes o que tienen incidencia en los Registros Públicos por venta de propiedades ajenas, debido a que se falsificaron documentos o los poderes fueron dados notarialmente, pero por personas que falsificaron firmas o (5) sustituyeron identidades.

¿Cómo garantizar eso si ya no vamos a tener estos datos en el DNI?

Yo conversaba el otro día con los del Colegio del Notariado. Y ellos tienen una preocupación muy grande, porque dice que ahora se va a dificultar la identificación de las personas con esta supresión de datos. Yo creo que sería bueno seguir conversando con los que trabajan en esta certificación de huellas o la dación de documentos, dan fe de los actos jurídicos que se llevan a cabo en sus despachos a efecto de evitar que se abra por ahí una ventana, un portillo por donde se puedan escapar algunas cosas que vengán a incidir en la seguridad ciudadana ya tan debilitada y maltratada, digamos así ¿No? Y yo le pediría, señor presidente, que ahondemos un poquito más en el tema teniendo en cuenta la casuística.

Consulte con el Ministerio Público, ¿qué tan difícil sería la identificación? Y con el propio Poder Judicial, porque cuando detienen a una persona lo primero que se hace es entrar al Reniec para ver huella, foto, firma, pero ya no va a haber esos datos ¿Cómo se va a dar eso?

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Pero no es así, lo que se hace es eliminar esos datos del DNI físico, pero precisamente las instituciones que lo requieren tienen acceso directo, el Ministerio Público, la Cancillería, Migraciones, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, etcétera, tienen acceso a esos datos directamente conectándose con Reniec, porque si no evidentemente estaríamos en todos los problemas que usted menciona, pero esto de ninguna manera se elimina, los datos están, los tiene la Reniec y aquellas instituciones que requieran esos datos como la policía, la Fiscalía, Migraciones, el Poder Judicial, pueden conectarse directamente con Reniec y obtener el dato, bueno, la huella ya sabemos, ese sistema está generalizado en los bancos, en las notarías, en una serie de tiendas que venden armas o municiones, todos tienen este sistema electrónico digital para que la huella pueda ser registrada, pero lo que va a desaparecer es del elemento físico por las razones mencionadas, que están siendo utilizados esos datos para secuestros, extorsiones y una serie de delitos y ciberdelitos que se están cometiendo desgraciadamente en abundancia en el último tiempo, esa es la idea, pero está garantizado lo otro porque evidentemente estas instituciones sí tienen que tener acceso a esos datos básicos.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (HYD).— Disculpe, presidente. La inmediatez y las razones por las cuales las instituciones dan informes negativos, ¿no está basado en la casuística también?, la inmediatez de la respuesta, del requerimiento de la información ¿Cómo sería? ¿Todo tendría un costo ahora? ¿Las

instituciones van a tener que pagar por tener ese ingreso? ¿Cómo es el tema? Por eso me gustaría que nos explique.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Bueno, esos detalles quedarán para el reglamento, pero la inmediatez se supone que está garantizada por el Reniec y así lo hemos conversado con el Reniec.

Congresista Aguinaga tiene la palabra.

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Gracias, presidente.

Este proyecto que crea el registro de personas con huellas dactilares dañadas o maltratadas dentro del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de la Reniec. Señor presidente, el registro va a contener los datos de todas las personas que por diversas razones sus huellas dactilares no son fácilmente reconocidas por todos estos equipos biométricos, facilitando con ello la realización de trámites diversos ante entidades públicas y privadas. En realidad, nosotros quizás no hemos tenido oportunidad de ver la dimensión en cuanto a la situación de estas personas que constantemente **(6)** están llamando porque no pueden cobrar sus cheques, no pueden cobrar jubilación porque tienen el registro de la huella dactilar dañada.

Esta es una verdadera revolución en el sistema de registro de identificación en beneficio de un sector de la población, presidente, porque elimina esta discriminación a este grupo de ciudadanos. Para ser más precisos, este proyecto convertido en ley, facilitará que estos ciudadanos puedan realizar gestiones, por ejemplo, el cobro de sus pensiones, Pensión 65, renovación de licencias de conducir, que lo vemos de manera cotidiana, como le digo, tiene una dimensión que nosotros no hemos alcanzado a ver, pero que es una realidad. Y otros casos similares, salvaguardando los derechos de identidad y acceso al pleno ejercicio de todos los derechos que como ciudadanos les corresponde.

En otras palabras, presidente, este proyecto nos asegurará que no habrá más jubilados sufriendo sin cobrar sus pensiones, porque sus huellas dactilares están maltratadas y los sistemas los rechazan. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente modificando el literal 1) del artículo 7 de la Ley 26497, referidos a las funciones del Reniec para implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento de los registros dactiloscópicos y pelmatoscópicos de las personas.

Se incluye aquí, presidente, la implementación, organización, mantenimiento y supervisión del registro de huellas dactilares dañadas o maltratadas, cuya mención consta registrada en el Documento Nacional de Identidad de cada persona que lo solicite, siguiendo el trámite establecido por la Reniec.

Estamos planteando también que corresponderá a cada entidad pública o privada establecer los mecanismos adicionales de verificación de identidad de las personas que tengan huellas dañadas o maltratadas, previa verificación de esta condición en el citado registro.

Este es un proyecto, señor presidente, que da soluciones. Que da soluciones, que cada vez se profundiza más y es importante para que este enorme grupo de personas vean la luz y que puedan lógicamente ejercer o hacer cumplir funciones que necesitan. ¿No es así? Pago de pensiones, Pensión 65 o brevete, no les autoriza.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Tiene la palabra el congresista Williams.

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).— Gracias, presidente.

Presidente, a mí me parece que esta iniciativa es importante porque, como dijo la congresista Echaíz, va por la seguridad.

En ese sentido, pienso yo que con la dirección está muy bueno. Se pierde un DNI y es fácil llegar a casa. La huella digital es tan pequeña que no necesita mucho estar. Ahora, en los lugares donde hay medios electrónicos, sí se va a poder determinar huella y firma.

Solamente me preocupa, y debería estar seguramente en la reglamentación, porque la idea es buena, ver el asunto de la firma para lugares muy alejados, donde solamente es un pueblo de la sierra, de la selva, que ven, obvio que también la cara ayuda, cara a cara, ya, pero la firma también puede ser, en el reglamento podría achicarse o mejorar ese asunto de la firma. Y hay algunas otras cosas más que podrían darse sobre la firma.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Sí, en efecto, eso es materia del reglamento, congresista Williams.

Tiene la palabra el congresista Caveró.

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Gracias, presidente.

Presidente, un poco en la misma línea, efectivamente por temas de seguridad puede ser oportuno quizás sacar la dirección de la persona. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo con retirar la firma. Mire, la firma en el DNI es una forma de verificar que la persona incluso estuviese firmando correctamente.

Digamos, uno va a pagar algo con una tarjeta de crédito y le hacen firmar. La única forma que la persona que está del otro lado del mostrador sepa que esa firma que se está colocando en el voucher de crédito es la misma firma de la persona, es mirando

su DNI. Así como justamente uno corrobora con el nombre del DNI el nombre que está en la tarjeta de crédito.

Entonces, la firma resulta también ser una medida de corroboración de que esa firma que se está colocando es la firma correcta, es la firma real de la persona y no se ha inventado una firma para justificar (7) cualquier gasto con una tarjeta de crédito que puede no pertenecerle. Entonces, pienso, presidente, que la firma debería mantenerse en el DNI. Y lo segundo, es que en el apartado j) de la disposición del artículo 7, se menciona la condición de titular de ser o no donante de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su muerte.

Hay que recordar que, en este Congreso, presidente, nosotros aprobamos una ley dictaminada ya por la Comisión de Salud, una ley para incentivar la donación de órganos y tejidos a nivel nacional, que estableció la condición de la presunción del consentimiento en la donación de órganos. Eso ya es una ley de la República, en pleno proceso de reglamentación. Entonces, yo sugeriría, presidente, cambiar la redacción de tal forma que se diga la condición del titular de ser donante, salvo haber manifestado su voluntad de no serlo. Mejor dicho, se presume la voluntad de serlo, salvo manifestación en contrario. De tal forma que se pueda estar acorde a la ley que hemos aprobado de presunción del consentimiento que ya es ley de la República.

Y lo otro, con respecto a la modificación de la firma, sí tengo mis reparos, pero bueno, lo dejo al debate.

El señor PRESIDENTE.— De acuerdo con lo de los órganos, lo de la firma, ahora con los medios digitales ya no se requiere la firma muchas veces o ya casi nunca para comprobar la identidad de la persona que usa la tarjeta o paga con alguno de estos medios. Eso de comprobar la firma, además, que es un sistema algo obsoleto, porque con todos los medios que hay ahora usualmente ya no se utiliza.

El congresista Muñante.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Sí, muchas gracias, presidente. A través suyo saludo a los colegas presentes y a los que están de manera virtual.

Creo que es importante, presidente, ir avanzando en cuanto a la protección de la seguridad de los datos de las personas y creo que el Reniec tiene una enorme responsabilidad frente a eso. Se sabe, presidente, que el sistema del Reniec lamentablemente es bastante vulnerable, de allí se saca información sensible para luego ser vendida en mercados negros, porque existe demasiada vulnerabilidad.

Entonces, creo yo que al darle ya esa responsabilidad expresa al Reniec de gestionar la actualización y garantizar la seguridad, creo que estamos avanzando en el sentido que ahora tendrán ellos

que implementar mayores mecanismos de protección, porque ellos son los que van a responder frente a esa filtración directa de información. Así como garantizar que otras entidades tampoco vulneren su propio sistema de seguridad. Por ende, estoy de acuerdo en ese sentido.

Yo sugeriría, presidente, que, si vamos a modificar el artículo 7 de la Ley de Registro de Identificación y Estado Civil, podamos añadir lo siguiente en el inciso b), cuando dice: Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas conforme a las leyes vigentes. Ese sería mi añadido, conforme a las leyes vigentes.

Y otra cosa, presidente, llamo la atención también para ver si es que pido a los asesores de la comisión, miren, este es el DNI que usamos en estos momentos, ese es el DNI electrónico. Lo único que diferencia a este DNI de un menor de edad es las letritas chiquitas que dicen tu fecha de nacimiento. Lo único que lo diferencia.

Antes, cuando existía el DNI azul, que todavía existe, se diferenciaba el color, ¿no es cierto? Actualmente no hay ninguna diferencia, es solamente en cuanto a la fecha de nacimiento, que es bastante chiquito. Esto propicia, presidente, a que se pueda mal utilizar el documento nacional de identidad por parte de menores de edad. Sobre todo, por gente inescrupulosa que podría utilizarlo. Entonces, yo sugeriría que, si es que es posible, en esta redacción, podamos disponer que el Reniec tenga la obligación de hacer un mecanismo que diferencie mucho más el DNI electrónico de los mayores con el de los menores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Creo que eso ya sería complicado. Habría que conversarlo primero con el Reniec a ver las posibilidades técnicas de hacer eso. Y ponerlo acá podría complicarnos la cosa.

Tiene la palabra la congresista de Echaíz.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (HYD).— Presidente, solamente para agregar unos datos a lo que ya había expuesto anteriormente.

Que hay que tener en cuenta que en el país más del 30% de la (8) extensión territorial no cuenta con Internet y, por tanto, las instituciones públicas que funcionan en ese sitio no pueden trabajar en línea con el Reniec, de ahí que solamente se rijan por los documentos físicos.

De otro lado, uno de los temas que preocupa es la identidad de las personas ancianas porque se les borran las huellas. Yo le agrego a ello los diabéticos, al diabético también se le borra las huellas y se hace difícil borrar. Pero el Reniec tiene una solución, el Reniec saca las huellas de los diez dedos y además

da un registro, un número. Y cada vez que la persona va a un banco, tiene que identificar con ese número.

No sé si alguno de los presentes haya verificado eso, pero en mi caso sí lo he constatado.

Así es que creo que hay que cuidar, creo, no solamente a los habitantes de la costa, sino también cuidar que en todo el país no se vaya a descuidar la seguridad ciudadana y a dificultar la identificación de las personas en las instituciones aquellas donde no tienen las facilidades de contar con Internet.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Tiene la palabra el congresista Morante.

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Presidente, buenos días.

Buenos días, con todos los colegas.

De acuerdo, en buena medida, con alguna de las cosas que ha señalado la congresista Echaíz, como, por ejemplo, el hecho de que no en todas las partes del Perú hay Internet o hay conexión a Internet.

Particularmente, en mi región Loreto el Internet básicamente es bueno, en Yurimaguas y en Iquitos más o menos. En el resto de la región es pésimo.

Ciertamente, hay algunas soluciones de empresas nuevas, tipo *Starlink* y esto, que te dan Internet satelital de bastante calidad, pero finalmente esto no necesariamente existe en todos los sitios, por lo tanto, la interconexión con Reniec es complicada.

Por otra parte, el tema de la firma, y ciertamente el asunto de la firma que esté en el DNI, yo creo que de una u otra manera sí podría mantenerse. Aunque yo, en lo particular, he tenido problemas con eso; porque, ustedes comprenderán, al yo ser invidente, mi firma nunca sale exactamente igual, nunca sale idéntica a la firma que está en el DNI y en alguna oportunidad he tenido problemas que he tenido que firmar dos o hasta tres veces para que pueda, digamos, ser lo más parecida posible ¿no?

Entonces, aun así, creo que el tema de la firma sí se debería mantener.

Básicamente eso, y el tema de la interconexión es complicado, es muy, muy complicado en muchas partes del país.

Lamentablemente, no todo el país tiene los servicios que sí tiene Lima, por ejemplo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— La congresista Juárez, tiene la palabra.

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— Sí, presidente.

En realidad, son dos proyectos muy importantes, del congresista Aguinaga y del congresista Zeballos que, en realidad, lo que buscan creo que es una simplificación, digamos, en la cantidad, en la proliferación de requisitos o de datos que están en todo el sistema.

Yo creo que es un proyecto importante y que puede en alguna forma prevenir alguna información que sale, y que es materia de uso en el crimen, en ese ambiente en donde están a la caza de qué cosas pueden encontrar para apropiarse.

He leído con atención, y sí estoy de acuerdo en el fondo, pero me preocupa algunos temas de conectividad, presidente.

O sea, no todo el Perú, y ni siquiera es que nos tenemos que ir al interior del país, sino acá salimos simplemente y estamos en las zonas altas de Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, acá nomás, y ya no hay conexión.

Entonces, ese tema no sé cómo podríamos solucionarlo. Quizás podríamos establecer un enfoque gradual de este proyecto, porque entiendo (9) que las opiniones técnicas por lo menos parecieran que están en contra, aun cuando me dicen que se trataba de otro proyecto inicial.

Entonces, tal vez podría hacerse de manera gradual, evaluar el impacto también que esto significaría en el proceso electoral inmediato que viene.

No sé si tal vez se pueda establecer un periodo para la aplicación de esta norma, que no colisione con el proceso electoral del 2026, que creo que tal vez le generaríamos algún problema, especialmente en el interior del país. Yo creo que ahí es donde debemos de tener cuidado.

Efectivamente, el proyecto, el artículo 32 señala que el acceso de esta información no es que no vaya a existir. El acceso se encuentra disponible a través de los canales de acceso a la información que disponga el reglamento de la presente ley, y eso es saludable realmente porque la información va a estar, la información va a estar.

Pero mi preocupación nuevamente vuelve en el sentido de que no necesariamente en el momento oportuno, como ha señalado la doctora Gladys Echaíz, en el sentido de que, por ejemplo, para el caso de detenidos se requiere la inmediatez. Si no tienes en ese momento la conexión a Internet, entonces no puedes realmente acceder a esa información.

Yo creo que el proyecto es bueno, los dos proyectos son buenos.

Y yo creo, por ejemplo, presidente, que el caso de uno revisando su DNI, el caso de la huella es tan absurda porque es un pedacito,

que creo que nadie logra verificar esa huella. Entonces, tal vez la huella no tiene sentido que permanezca en un DNI.

Creo que eso, por ejemplo, podría fácilmente quitarse sin ningún problema.

Sí, mi preocupación es no por el caso de nosotros, que estamos cerca, que tenemos todos los accesos, que hay Internet, sino en otros lugares en donde sí utilizan la firma.

Y sí, por ejemplo, acá mismo, en algunos lugares, uno va y firma, y miran el DNI y ven si es que corresponde o no.

Yo, la verdad, es que creo que tal vez podríamos darle una mirada o hacer un cuarto intermedio y poder llegar a algún acuerdo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Bueno, respecto a la firma, yo tengo el mismo problema con el congresista Morante, mi firma nunca es igual.

Tiene la palabra la congresista Herrera.

La señora HERRERA MEDINA (RP).— Gracias, presidente.

Yo comulgo con las colegas, que me han antecedido, en cuanto que los Proyectos de Ley 8324 y 10417 son bastante importantes.

Sin embargo, la coyuntura que vivimos, presidente, en cuanto al Internet, de pronto nos permitiría evaluar la aplicación de forma progresiva. Eso sería importantísimo, porque entenderíamos nosotros también que a medida que crecemos como población y el Poder Ejecutivo implementa la tecnología a nivel país, esto debe ir de la mano con esta ley que se encuentra vigente.

Es en cuanto a la observación que ya habían hecho mis colegas parlamentarios por el tema del Internet, que sí es un problema como país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Tiene la palabra el congresista Caverero.

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Presidente, tengo una duda que estamos discutiendo aquí.

Podría haber casos en los que la dirección sea útil en el momento más oportuno e inmediato. Se me ocurre, por ejemplo, cuando una persona es atropellada en medio de la pista, la carretera. Digamos, hay que ubicar a un familiar, hay que saber dónde se le puede llevar, lo que fuera.

No sé si este hecho de esconder la dirección en algún lugar, que para el delincuente igual va a ser accesible, porque finalmente el delincuente cuando quiere ingresar al sistema va a poder

ingresar al sistema. Pero lo que podríamos hacer es crear un costo de transacción adicional para los casos realmente urgentes o realmente donde es necesario sí saber dónde está la persona, o sí saber cómo ubicar a alguien, o en dónde poder ubicar a alguien que pueda auxiliar, atender, no lo sé.

O sea, no sé si estamos cumpliendo con la finalidad de dar seguridad, porque solamente estamos poniendo un costo de transacción adicional a dar la información, pero no estamos, digamos, ocultándola definitivamente de las personas. Entonces, no sé, realmente. Imagínense, sí podemos perjudicar los casos que son urgentes.

No sé en esos tipos de casos cómo se está planteando o qué se podría hacer.

El señor PRESIDENTE.— Congresista, como en todo, hay pros y contras. Y hay que evaluar qué cosa es lo más conveniente, qué pesa más, (10) si los temas que se han aducido de seguridad o los que se están planteando, cuáles son los más importantes. Ese es el punto.

Congresista Soto.

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Presidente, muchas gracias.

Saludos a todos los miembros titulares de esta comisión.

Presidente, en el mismo sentido que la congresista Patricia Juárez, yo creo que el proyecto de ley en el tema de fondo está bien, pero lo que me preocupa es, por ejemplo, el tratamiento, las personas que viven en la costa, frente a la selva y en la sierra.

Bueno, yo estoy de acuerdo con el proyecto del congresista Zeballos, con el congresista Aguinaga, está bien, me parece perfecto. Pero también hemos visto, hay opiniones contrarias, por ejemplo, el mismo Reniec no está de acuerdo en las opiniones que estoy revisando en el predictamen, igual del Jurado Nacional de Elecciones, del ONPE, del Colegio de Notarios también. O a no ser que hayan hecho alguna mesa de trabajo y hayan perfeccionado.

El señor PRESIDENTE.— Fue el proyecto inicial.

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Ah ya, de acuerdo.

Entonces, igual, yo también planteo que hagamos un cuarto intermedio, quizás busquemos algún texto consensuado, pero no solamente pensando en la costa, señor presidente, porque ahí, por ejemplo, vayamos a Loreto, en Iquitos, ahí no hay Internet. Vayamos a Huancavelica, en nororiente, Tayacaja, en Castrovirreyna, en Huaytará, ahí no hay Internet. Entonces, ese es el problema.

Yo estoy de acuerdo con la iniciativa, pero si el espíritu del proyecto de ley es aprobar algo para mejorar, bueno, hagamos, de

repente, con tranquilidad y estoy seguro que con su equipo técnico la comisión puede evaluar tranquilamente.

Nosotros, obviamente, estamos de acuerdo.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Sí, a ver, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo.

Aclaro nuevamente que esta opinión es sobre el proyecto inicial, que no es el dictamen que se está presentando.

Se recoge el aporte del congresista Muñante respecto a la precisión en el artículo 7-B, incorporándose la frase "conforme a ley".

Se recoge el aporte del congresista Cavero en el artículo 32 respecto a la donación de órganos, su condición de donante, salvo que haya manifestado expresamente su voluntad en contrario.

Respecto a las propuestas de las congresistas Echaíz, Juárez Gallegos y Herrera, se incorpora una disposición complementaria transitoria para que la aplicación de la presente ley sea progresiva, según lo disponga el Reniec en su reglamento. Sería:

"La implementación de lo dispuesto en la presente ley es de aplicación progresiva, según lo establezca su reglamento. Los documentos nacionales de identidad, emitidos con anterioridad a la presente ley, mantienen su vigencia".

Esa es la modificación que se introduciría recogiendo los aportes de los congresistas, para resolver los problemas y objeciones planteadas.

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).— Presidente, el que sea progresiva significa que ellos van a ir evaluando si entra primero un concepto, luego el otro concepto, ¿verdad?

El señor PRESIDENTE.— Sí.

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).— Bien.

Entonces, presidente, yo solicito que se acumule el Proyecto de Ley 1037, que guarda relación con lo mismo, al predictamen recaído en los Proyectos de Ley 8324, 10417 Ley que modifica la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con la finalidad de proteger la identidad y seguridad personal.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Se acumula, entonces, el proyecto 1037, como ha planteado el congresista Williams.

A ver, señora secretaria técnica, lea el texto como ha quedado.

El congresista Cutipa, tiene la palabra.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP).— Sí, presidente.

De manera fraternal, respecto a lo que ha señalado el colega Muñante, para que se agregue conforme a ley. Yo no sé si algún dato se agrega en los registros que no esté de acuerdo a ley.

Entonces, me parece que está demás agregar ello, porque todos los datos, todos los registros, están conforme a ley, presidente.

El señor PRESIDENTE.— No se pierde nada poniéndole eso, unas pocas palabras. (11)

Secretaria técnica, por favor, de lectura.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Con su venia, señor presidente.

El literal b) del artículo 7 que se modifica, quedaría de la siguiente manera:

“Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas, conforme a las leyes vigentes; así como las resoluciones judiciales o administrativas que a ellos se refieran, susceptibles de inscripción, y los demás actos que señale la ley”.

Se incorpora la Disposición Complementaria Transitoria siguiente:

ÚNICA. Implementación progresiva

La implementación de lo dispuesto en la presente ley es de aplicación progresiva, según lo establezca su reglamento. Los documentos nacionales de identidad emitidos con anterioridad a la presente ley mantienen su vigencia.

Eso es todo, señor presidente.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Cavero.

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Sí, presidente.

Haciendo un agregado también a lo planteado por el congresista Muñante, quisiera colocar que se interprete o que se aplique de acuerdo a las leyes vigentes y a los principios constitucionales.

Porque hay que recordar, presidente, que el Tribunal Constitucional en diversas oportunidades, siguiendo principios constitucionales, ha emitido sentencias que han modificado el estado civil de las personas en el Perú, vía sentencia judicial, con lo cual es importante, efectivamente, que se sigan los principios de la ley y, por supuesto que sí, también los principios de la Constitución. Yo creo que ambos deben estar vigentes.

En todo caso, porque, como dice el congresista Cutipa, sino resulta absolutamente accesorio. Pero creo que, en todo caso, es mejor precisar y poner los puntos sobre las íes que no ponerlos, ¿no?

El señor PRESIDENTE.— Vamos a entrar en un debate gravísimo.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Presidente.

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién? ¿Congresista Echaíz?

Congresista Juárez.

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— No, nada, algo muy práctico y muy simple.

En realidad, creo que el agregar lo mencionado por el congresista Muñante respecto, digamos, conforme a la ley vigente, me parece que es redundante porque, en realidad, se registra lo que la ley dice, o sea, no se registra lo que la ley no dice.

Entonces, yo creo que el tema que propone Alejandro Cavero también me parece que estaría demás.

Entonces, mejor ninguna de las dos cosas y nos quedamos tal como está. Porque, la verdad, es que no ayuda absolutamente en nada o no aclara nada.

Tal vez si fuera una norma que requiere como cierta aclaración para su validez o porque ha habido algún problema en la aplicación, podríamos nosotros, con nuestra capacidad de legislar y la atribución que tenemos, solucionar ese problema. Pero no veo que haya ningún problema que amerite que agreguemos, digamos, lo propuesto por el congresista Muñante.

Entonces, creo que debe quedar tal cual.

El señor PRESIDENTE.— Es un caso de doble redundancia, entonces.

A ver, congresista Muñante.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Presidente, nos ha tocado revisar casos en los cuales, por ejemplo, cuando se les pregunta a las personas su estado civil, pensando que un matrimonio religioso constituye un matrimonio civil, han dicho 'estoy casado', y luego han tenido que rectificar todo el procedimiento de ese estado civil. Por eso existe el procedimiento de rectificación de estado civil.

De tal manera, que muchas veces las inscripciones con respecto a los divorcios, a las defunciones, se hacen en base a declaraciones juradas y no necesariamente por lo que la ley establece.

Por esa razón, es que no es, si bien en cierto puede sonar redundante, pero no está demás señalar que se hagan conforme al ordenamiento jurídico.

Lo que plantea el congresista Cavero en cuanto a si es que el Tribunal Constitucional decide darle la razón en razón a un proceso, aquí está claramente, dice "resoluciones judiciales o administrativas" que se entiende que si una disposición, un cambio viene por parte de una decisión judicial o del tribunal, eso también se estaría estableciendo. Eso sí es redundante, presidente.

Lo que estoy pidiendo, según la práctica y los que conocen los procesos de rectificación de estado civil y otros, saben perfectamente a qué me estoy refiriendo, presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Cavero.

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Sí, presidente.

Entonces, coloquemos, como bien ha sostenido el señor Muñante, coloquemos conforme al ordenamiento jurídico y listo. No pongamos la jerarquía de la Constitución y la ley una por encima de otra, y se acabó.

El señor PRESIDENTE.— Conforme al ordenamiento jurídico nacional... No, el congresista Cutipa no quiere que esté conforme al ordenamiento jurídico.

Congresista Juárez. (12)

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— Presidente, es que leyendo, digamos, y haciendo interpretación literal del inciso b), dice: "Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones, y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas".

Y la pregunta es: Los nacimientos, los matrimonios y los divorcios y las defunciones, ¿no se realizan de acuerdo a ley? O sea, la forma de cómo se registran son de acuerdo a ley. Te casas, y cuando uno se casa, se casa con todos los requisitos que te pide y con funcionario competente, los requisitos que te pide el registro civil. Eso es de acuerdo a ley.

Y ese registro está ya reglamentado en Reniec, o sea, ellos ya saben cómo lo hacen.

Entonces, la verdad, es que incidir nuevamente, no sé en qué otra forma puede inscribirse una defunción.

La persona falleció, certifican que falleció, se expide la partida de defunción y se inscribe. No hay otra cosa.

Decir "de acuerdo a ley", no sé, la verdad es que a mí sí me parece redundante.

Yo creo que uno se casa y se muere de acuerdo a ley. No hay otra forma.

El señor PRESIDENTE.— No hay más pedidos de palabra.

Congresista Medina.

La señora HERRERA MEDINA (RP).— Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Perdón.

La señora HERRERA MEDINA (RP).— Herrera.

Yo, comulgo con todos los ponentes, tanto con la doctora Juárez, como con el doctor Muñante, en el sentido de que si bien por un lado es una redundancia, presidente, a veces esas redundancias sí son necesarias, porque hemos visto funcionarios y funcionarios. Y, realmente, los espacios de vacíos cuando no hay, digamos, algún tema en la ley sobre todo, o en una norma que salga que lo especifique, se cogen de eso para no hacer un procedimiento.

Y en esa línea de pronto lo que mencionaba el congresista Cavero y decía que se ponga "en base al ordenamiento jurídico", si bien es lo mismo, engloba un todo, y probablemente eso nos lleve a un consenso y podamos votar el predictamen.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Dejemos, sugiero, "conforme al ordenamiento jurídico nacional". Algunos consideran redundante, pero no crea ningún problema. El ordenamiento jurídico nacional.

Lea ese añadido, señora secretaria técnica, la del congresista Cavero.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista, con su venia.

En el artículo 7, la redacción queda de la siguiente manera:

"Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas, conforme al ordenamiento jurídico nacional." El resto del inciso queda igual.

Y en el artículo 32, literal j), conforme usted dio lectura a propuesta del congresista Cavero, la redacción queda de la siguiente manera:

"La condición de donante de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su muerte, salvo que haya manifestado expresamente su voluntad en contrario".

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, no habiendo más intervenciones, se pone al voto el predictamen recaído en los proyectos 8324/2023-CR, 10417/2024-CR, que propone la Ley que modifica la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con la finalidad de proteger la identidad digital.

Señora secretaria técnica, proceda a llamar a los señores congresistas para registrar el sentido de su voto.

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal:

Con su venia, señor presidente.

Rospigliosi Capurro.

El señor ROSPIGLIOSI CAPURRO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Rospigliosi Capurro, a favor.

Aragón Carreño.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Aragón Carreño, en abstención.

Camones Soriano (); Aguinaga Recuenco.

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Aguinaga Recuenco, a favor.

Juárez Gallegos.

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Juárez Gallegos, a favor.

Moyano Delgado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Moyano Delgado, a favor. (13)

Alegría García.

El señor ALEGRÍA GARCÍA (FP).— Alegría, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Alegría García, a favor.

Lizarzaburu Lizarzaburu.

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (APP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Lizarzaburu Lizarzaburu, a favor.

Elías Ávalos.

El señor ELÍAS ÁVALOS (APP).— A favor, señorita.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Elías Ávalos, a favor.

Calle Lobatón,

La señora CALLE LOBATÓN (PP).— Calle Lobatón, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Calle Lobatón, a favor.

Juárez Calle.

La congresista Juárez Calle, manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma.

Juárez Calle, a favor.

Luna Gálvez (); Mita Alanoca.

El señor MITA ALANOCA (PL).— Abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Mita Alanoca, abstención.

Muñante Barrios.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Muñante Barrios, a favor.

Herrera Medina.

La señora HERRERA MEDINA (RP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Herrera Medina, a favor.

Soto Palacios.

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, en abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Soto Palacios, abstención.

Paredes Gonzales.

El señor PAREDES GONZALES (BM).— Paredes Gonzales, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Paredes Gonzales, a favor.

Quiroz Barboza.

El señor QUIROZ BARBOZA (BM).— Quiroz, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Quiroz Barboza, a favor.

Williams Zapata.

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Williams Zapata, a favor.

Tudela Gutiérrez.

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AP-PIS).— Abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Tudela Gutiérrez, abstención.

Cavero Alva.

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Cavero Alva, a favor.

Cutipa Ccama.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP).— Abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Cutipa Ccama, abstención.

Valer Pinto.

El señor VALER PINTO (SP).— Valer Pinto, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Valer Pinto, a favor.

Morante Figari.

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Morante Figari, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Morante Figari, a favor.

Flores Ramírez.

El señor FLORES RAMÍREZ (BS).— Flores Ramírez, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Flores Ramírez, a favor.

Echaíz de Núñez Izaga.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (HYD).— Abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Echaíz de Núñez Izaga, abstención.

Luque Ibarra.

La congresista Luque Ibarra, manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma.

Luque Ibarra, a favor.

La señora LUQUE IBARRA (BDP).— Luque, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Sí, ya se registró a través de la plataforma y se ratifica ahora de manera oral, congresista Luque.

Segundo llamado de los congresistas titulares de la comisión.

Camones Soriano.

La señora CAMONES SORIANO (APP).— Abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Camones Soriano, abstención.

Luna Gálvez ().

Señor presidente, habiendo culminado con el llamado del sentido de votación de los señores congresistas, se tiene registrado 19 votos a favor, cero en contra, siete abstenciones.

El dictamen ha sido aprobado por mayoría.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señora secretaria técnica.

Conforme al registro de votos anunciado por la secretaria técnica, el dictamen ha sido aprobado por mayoría.

Como segundo punto de agenda, tenemos el Informe de Opinión Consultiva 002-2024-2025-CCR-CR respecto a la consulta formulada por la presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones sobre facultades de fiscalización de control político de la

Comisión de Transportes y Comunicaciones sobre empresas concesionarias.

El presente informe es de opinión consultiva, responde al pedido de la congresista Hilda Portero, presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, quien solicita nos pronunciemos respecto a los alcances de la función de control político de una comisión ordinaria, como es el caso de la Comisión de Transportes y Comunicaciones sobre las empresas concesionarias del sector Transportes y Comunicaciones.

A efecto de responder dicha consulta, se analizó el marco jurídico respecto de los conceptos de alcance, naturaleza y efecto de la concesión, del interés público, del control político, del mandato de representación parlamentaria y las funciones de las comisiones ordinarias del Congreso de la República.

Respecto a la concesión, se tiene claro que es un instituto del derecho administrativo, al que el Estado recurre para que los particulares colaboren con ella en la prestación de determinadas obras o servicios públicos.

En mérito a ello, las empresas concesionarias tienen un carácter mixto, privado en su estructura, pero público en su finalidad, **(14)** lo que las coloca bajo el escrutinio del control político en aspectos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y su impacto en el interés público.

Este control político tiene sustento en los artículos 93 y 102 de la Constitución Política, así como en el artículo 5 del Reglamento del Congreso, en base a los cuales los congresistas de la República son representantes directos de la población encargados de velar por sus intereses y garantizar que los servicios públicos esenciales se presten adecuadamente.

En ese sentido, las empresas concesionarias, al ser responsables de servicios públicos delegados por el Estado, están sujetas del escrutinio político para asegurar que cumplan con su finalidad social.

La función de representación otorga a los congresistas la legitimidad para actuar como intermediarios entre la población y las entidades privadas que gestionan servicios públicos. Esto implica que las comisiones ordinarias, como la comisión de Transportes y Comunicaciones, tienen el deber de supervisar cómo estas empresas afectan a los usuarios y garantizan el bienestar colectivo.

Las concesiones, como dijimos, son actos administrativos destinados a satisfacer necesidades públicas mediante la colaboración con particulares. Por ello, cualquier deficiencia en la prestación del servidor público impacta directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Frente a ello, la función

representativa obliga a los congresistas a intervenir políticamente para fiscalizar dichos impactos. En este contexto, el control político sobre empresas concesionarias no solo es una atribución legal, sino también un mandato derivado del deber constitucional de representación. En dicha línea, las comisiones ordinarias del Congreso, entre ellas la comisión de Transportes y Comunicaciones, pueden realizar acciones de control político sobre las empresas concesionarias, pero únicamente respecto de los aspectos estrictamente vinculados a la prestación del servicio público, al impacto en la población, al cumplimiento normativo y al uso adecuado de los bienes públicos.

Cabe precisar que en control político no debe extenderse aspectos internos o privados que no están directamente relacionados con la prestación del servicio público.

Así, por ejemplo, no se puede intervenir en decisiones sobre contratación o gestión del personal interno. No es competencia fiscalizar estados financieros o decisiones empresariales privadas que no impacten directamente en el cumplimiento del contrato ni el interés público. No se puede intervenir en las estrategias comerciales o administrativas internas que no afecten el interés público.

De otra parte, a fin de consolidar la intervención estatal en la supervisión de las concesiones, se tiene lo dispuesto en el numeral 8, del artículo 1, del título preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, donde se establece que las personas jurídicas bajo régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado son consideradas como entidades de la Administración Pública, lo que implica una integración de dichas entidades privadas al ámbito de la Administración Pública.

Asimismo, según lo dispuesto en los artículos 397, 397A, 398 y 398A del Código Penal, los representantes y/o directivos de las empresas concesionarias son pasibles de ser considerados autores del delito de cohecho activo en cualquiera de sus modalidades. Del mismo modo, pueden ser considerados cómplices primarios, cómplices secundarios, investigadores de delitos contra la Administración Pública conforme a lo regulado en los artículos 376 al 401 del mismo cuerpo normativo.

Si el Código Penal permite sancionar a los directivos de las empresas concesionarias por delitos graves como el cohecho activo, entonces, con mayor razón, resulta razonable y oportuna la intervención del control político sobre los actos concesionarios, que inclusive es menos impasivo que las sanciones penales.

En tal sentido, queda claro y, plenamente legitimada la intervención del Parlamento en el control político hacia las

empresas concesionarias cuyas comisiones ordinarias, a tenor de lo dispuesto en el artículo 34, del Reglamento del Congreso, tienen como función principal el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y en particular de los sectores que componen la administración pública.

En el caso en particular de la comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, es evidente que tiene una competencia para supervisar y controlar las actividades del sector transporte y comunicaciones, entre ellas las empresas concesionarias que se encuentran en dicho ámbito, sobre todo cuando este sector, muchos de los activos concesionados constituyen activos críticos nacionales dentro de los que se encuentran aeropuertos internacionales, carreteras y autopistas, puertos marítimos estratégicos, redes ferroviarias, redes de fibra óptica, centros de datos y servidores nacionales, estaciones de transmisión de radio y televisión, cuya afectación, interrupción o destrucción tendría un impacto aún más grave en la seguridad, economía, salud pública o funcionamiento del Estado.

En mérito a todas estas consideraciones, la propuesta del informe de opinión consultiva concluye en lo siguiente: Primero, el control político es una función que la Constitución Política del Perú confiere al Congreso de la República **(15)** como órgano representativo de la Nación, a fin de velar por el respeto de la Constitución y las leyes y disponer, como conveniente, para ser efectiva la responsabilidad de los infractores, en mérito al cual puede fiscalizar y supervisar todos los actos que involucren recursos e interés público.

Segundo, las comisiones ordinarias del Congreso de la República, entre ellas la comisión de Transportes y Comunicaciones, están plenamente facultadas para ejercer control político sobre empresas concesionarias en aspectos relacionados al ámbito de sus competencias, siempre que estén directamente vinculadas con la prestación de servicios públicos, obras e infraestructura o recursos públicos.

Tercero, el control político respecto a las empresas concesionarias, no abarca aspectos internos: como gestión organizacional, laboral, financiera, comercial o decisiones empresariales privadas, que no impacten directamente en el cumplimiento del contrato de concesión, ni en el interés público.

Habiendo culminado la sustentación, pongo a debate el presente informe de opinión consultiva, y se le da el uso de la palabra a los congresistas que lo soliciten.

No habiendo más intervenciones, entonces se pone al voto el informe de opinión consultiva número 002-2024-2025-CCR-CR, respecto a la consulta formulada por la presidenta de la comisión de Transportes y Comunicaciones, sobre Facultades de

Fiscalización y de Control Político de la Comisión de Transportes y Comunicaciones sobre Empresas Concesionarias. Señora secretaria técnica, proceda a llamar a los señores congresistas para registrar el sentido de su voto.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Con su venia, señor presidente. Rospigliosi, Capurro.

El señor ROSPIGLIOSI CAPURRO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Rospigliosi Capurro, a favor.
Aragón Carreño.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Aragón Carreño, a favor.
Camones Soriano.

La señora CAMONES SORIANO (APP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Camones Soriano, a favor.
Aguinaga Recuenco.

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Aguinaga Recuenco, a favor.
Juárez Gallegos.

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Juárez Gallegos, a favor.
Moyano Delgado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Moyano Delgado, a favor.
Alegría García.

El señor ALEGRÍA GARCÍA (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Alegría García, a favor.
Lizarzaburu Lizarzaburu.

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (APP).— Lizarzaburu, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Lizarzaburú, a favor.
Elías Ávalos.

El señor ELÍAS ÁVALOS (APP).— A favor, señorita.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Elías Ávalos, a favor.
Calle Lobatón.

La señora CALLE LOBATÓN (PP).— Calle Lobatón, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.- Calle Lobatón, a favor.

Juárez Calle. La congresista Juárez Calle, manifiesta su voto a favor, a través del chat de la plataforma. Juárez Calle, a favor.

Luna Gálvez (); Mita Alanoca.

El señor MITA ALANOCA (PL).- A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.- Mita Alanoca, a favor.

Muñante Barrios.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).- A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.- Muñante Barrios, a favor.

Herrera Medina. La congresista Herrera Medina, manifiesta su voto, a favor a través del chat de la plataforma. Herrera Medina, a favor.

Soto Palacios.

El señor SOTO PALACIOS (AP).- Soto Palacios, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.- Soto Palacios, a favor.

Paredes Gonzales.

El señor PAREDES GONZALES (BM).- Paredes Gonzales, a favor. Quiroz Barboza().

La señora LUQUE IBARRA (BDP).- Luque Ibarra, abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.- Luque Ibarra, abstención.

Quiroz Barboza (); Williams Zapata.

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).- A favor.

El señor QUIROZ BARBOZA (BM).- Quiroz Barboza, en abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.- Quiroz Barboza, en abstención. William Zapata, a favor.

Tudela Gutiérrez.

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AP-PIS).- A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.- Tudela Gutiérrez, a favor.

Cavero Alva.

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).- A favor.

Cavero Alva, a favor.

Cutipa Ccama.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP).- Abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.- Cutipa Ccama, abstención.

Valer Pinto.

El señor VALER PINTO (SP).— Valer Pinto, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Valer Pinto, a favor.

Morante Figari.

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Morante Figari, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Morante Figari, a favor.

Flores Ramírez.

El señor FLORES RAMÍREZ (BS).— Flores Ramírez, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Flores Ramírez, a favor.

Echaíz de Núñez de Izaga.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (HYD).— A favor. (16)

La SECRETARIA TÉCNICA.— Echaíz de Núñez Izaga, a favor. Segundo llamado a los congresistas titulares que no han respondido al llamado. Luna Gálvez.()

Se va a proceder a llamar a los congresistas accesitarios de los congresistas titulares que no han respondido el llamado. Espinoza Vargas(); Tello Montes().

Señor presidente, habiendo culminado con el llamado del sentido de votación de los señores congresistas en la opinión consultiva, se tiene registrado 23 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones.

El informe de opinión consultiva ha sido aprobado por mayoría.

El señor PRESIDENTE.— Conforme Al registro de votos anunciado por la secretaria técnica, el informe ha sido aprobado por mayoría.

Como tercer punto...

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— Presidente, ¿me permite una palabrita, por favor?

El señor PRESIDENTE.— Adelante, congresista Juárez.

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— En realidad, presidente, ya se ha votado, efectivamente, la opinión consultiva. Lo que señala es que las comisiones ordinarias del Congreso están facultadas para ejercer control político. Pero a mí me queda, digamos, cierta duda respecto a que si estamos hablando de tareas de fiscalización o el ejercicio del control político, que de acuerdo a lo que señala inclusive el propio dictamen, el Tribunal Constitucional señala que el control político se caracteriza por ser institucionalizado, lo realiza un órgano con arreglo a una serie de procedimientos, tiene como agente de control a un órgano cualificado por su condición política. Entonces, la pregunta es,

¿una empresa concesionaria tiene condición política? Entonces, no sé, si es que en realidad el tema va dirigido hacia... que si las comisiones ordinarias tienen tareas, o sea, funciones de fiscalización a empresas concesionarias, que por su propia naturaleza sabemos que tienen la condición, de acuerdo a la ley, que ellos... que los rige, ellos son consideradas, a ver, *las personas jurídicas, bajo el régimen privado, que prestan servicios públicos en virtud de una concesión de legación, son consideradas, como entidades de la administración pública. O sea, las empresas concesionarias de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general, son consideradas concesión... son consideradas como digamos... personas, bajo la ley del procedimiento administrative, dentro de la administración pública, pero son órganos políticos.*

El señor PRESIDENTE.- Parece que lo que ha leído se refiere no a la empresa, sino al órgano de control, es decir, a la comisión ¿Se da cuenta en el Pleno?

Vamos entonces, con los predictámenes de control de los Decretos Legislativos 1631, 1650, 1651, 1654, 1657 que han sido emitidos en el marco de facultades delegadas, que el Congreso de la República otorgó al Poder Ejecutivo, a través de la ley autoritativa 32089, publicada el 4 de julio de 2024, a través de la cual se elevó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

Asimismo, tenemos los tratados internacionales Ejecutivos 262, 266, 276, 282, que fueron ratificados por el Poder Ejecutivo el año 2021. Cabe precisar que todos los decretos legislativos y tratados internacionales ejecutivos antes mencionados fueron materia de análisis y emisión de informes previamente aprobados por la subcomisión de Control Político, durante el periodo anual de sesiones 2024-2025, bajo la presidencia del congresista Arturo Alegría.

A continuación doy a conocer un breve detalle respecto a cada uno de **(17)** ellos:

Uno, Decreto Legislativo 1631, se emitió con la finalidad de establecer medidas de simplificación administrativa que mejoren y agilicen el procedimiento actual del marco normativo de saneamiento físico-legal de bienes inmuebles del sector educativo en relación con las instituciones educativas públicas.

Decreto Legislativo 1650, fue emitido con el objeto de modificar el artículo 8, de la Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de otorgar a este sector la función de establecer disposiciones para promover el desarrollo de la construcción a través de tecnologías constructivas no convencionales.

El Decreto Legislativo 1651, se emitió con el objeto de realizar previsiones, respecto a la ampliación del plazo límite para la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental, y de la solicitud de autorización del vertimiento de aguas residuales tratadas a los cuerpos naturales de agua y para el reúso de aguas residuales tratadas ante la autoridad competente.

El Decreto Legislativo 1654 se emitió, con el fin de promover y facilitar condiciones para la adaptación de los servicios públicos de protección social en el país, a fin de contribuir a la mejora de la resiliencia de la población frente a las múltiples situaciones de emergencia considerando las necesidades diferenciadas de la población por ciclo de vida, género, discapacidad, pertenencia cultural, entre otros enfoques reconocidos por las políticas de Estado. En este predictamen se corregirá la sumilla del predictamen, donde se hace referencia al Decreto Legislativo 1405 y debe decir decreto legislativo 1654, cuya fecha de informe es del 22 de enero de 2025.

El Decreto Legislativo 1657, se emitió con el fin de simplificar los requisitos para tramitar licencias de funcionamiento en monumentos históricos; y, facilitar la formalización de actividades económicas.

En ese sentido, señores congresistas, realizado el examen de constitucionalidad a estos decreto legislativos, se concluye que estos cumplen con los parámetros constitucionales previstos por la legislación delegada establecidos en el artículo 104, de la Constitución Política. Esto es que el objeto de análisis no se encuentra referido a reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y ley de cuenta general de la República, y no lesionan derechos fundamentales. Además, se tiene que los decretos legislativos se encuentran dentro del ámbito de la materia delegada y se han emitido dentro del plazo de la ley autoritativa. Del mismo modo, han sido informados al Congreso de la República dentro de los plazos establecidos en el Reglamento del Congreso.

Paso a sustentar los predictámenes de los tratados internacionales ejecutivos.

Tratado Internacional Ejecutivo 262, ha tenido como objeto que la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, viene de una contribución financiera, a favor de Perú, denominado el socio para la ejecución del programa de violencia contra las mujeres, fortalecer la prevención y la justicia, reducir la impunidad y tolerancia de la violencia contra las mujeres.

El Tratado Internacional Ejecutivo 266, tuvo como finalidad establecer el marco jurídico que permitirá la recuperación, a favor, de la República del Perú de activos adquiridos, ilícitamente, y que se encuentran incautados en la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo.

El Tratado Internacional Ejecutivo 276, ha tenido el objeto de convenir las condiciones para el funcionamiento de la Oficina de Representación de la Onusida para los países andinos en el Perú, con la finalidad, de realizar a cabalidad las funciones inherentes a la Onusida. Entre estas funciones se encuentra coordinar los esfuerzos del Sistema de Naciones Unidas en el apoyo a los países para acudir con las nuevas infecciones.

El Tratado Internacional Ejecutivo número 282, tiene la finalidad de permitir que los nacionales de cualquiera de las partes que sean titulares de los documentos de viaje válidos puedan ingresar, permanecer, salir y transitar por el territorio de la otra parte sin visa, por un periodo no mayor de 90 días, dentro de 180 días.

Luego del análisis realizado a dichos tratados ejecutivos, se ha verificado que todos cumplen con los requisitos formales y materiales para su emisión, puesto que no versan sobre materia de derechos humanos, soberanía, dominio, integridad del Estado, defensa nacional, ni sobre obligaciones financieras del Estado. Asimismo, tampoco crean, modifican o suprimen tributos, ni exigen modificación o derogación de una ley, no requieren medidas legislativas para su ejecución.

Por otra parte, también se ha verificado que los referidos tratados ejecutivos han cumplido con el plazo de tres días útiles posteriores la celebración de los mismos para que el Poder Ejecutivo del Congreso de la República.

En tal sentido, esta comisión coincide con la análisis realizada por la Subcomisión de Control político, tanto a los decretos legislativos como a los tratados internacionales ejecutivos que he sustentado, coincidiendo en todos los casos, se ha cumplido con los parámetros constitucionales y reglamentarios para su emisión.

En consecuencia, habiendo culminado con la sustentación, pongo a vuestra consideración la aprobación de los nueve predictámenes, en los términos que acabo de sustentar. **(18)**

Si algún congresista desea intervenir tiene el uso de la palabra. Si no, pasamos al voto sugiriendo que la votación se realice en bloque. No habiendo intervenciones se pone al voto los predictámenes de control recaído en los Decretos Legislativos 1631, 1650, 1651, 1654, 1657, en los tratados internacionales ejecutivos 262, 6276, 282, los cuales, atendiendo que todos fueron previamente, aprobados por la subcomisión de control político, serán votados en bloque. Si no hay ninguna oposición, votaremos en bloque.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (HYD).— Presidente, una consulta.

El señor PRESIDENTE.— Señora Echaíz.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (HYD).— *Presidente, en el artículo 7 dice, la inscripción registral posee sólo respecto de aquellos bienes inmuebles sobre los cuales no exista proceso judicial que cuestione el derecho de propiedad o posesión del Estado. Se considera que exista proceso judicial en aquellos casos en que la demanda ya ha sido notificada hasta un día antes de la notificación, publicación del acto de saneamiento, de la presentación del título ante el registro de predio del Sunarp según corresponda, y que se encuentre pendiente de resolución definitiva.*

Pregunto, ¿si no se hubiera iniciado un proceso judicial o no se hubiera notificado la demanda, pero el inmueble de propiedad de un particular, con esta norma se va a proceder a la inscripción registral?

La Constitución establece que si el Estado quiere tomar la propiedad de un inmueble, propiedad privada, tiene que expropiarlo.

¿Cómo quedamos ahí?

El señor PRESIDENTE.— No, nosotros no discutimos el fondo del asunto, ese tema. Discutimos, solamente la forma, si es que ha cumplido los requisitos, ha sido enviado a tiempo, no los temas que están incluidos en el decreto.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (HYD).— Por una interpretación en contrario, ¿no dice? Siempre que sea notificado un día antes de la publicación del acto de saneamiento de la presentación del título ante los registros públicos de la Sunarp, según corresponde y se encuentre pendiente de resolución. Solo ahí se obtienen. Y, ¿si no lo han notificado, sigue para adelante? Contrario...

El señor PRESIDENTE.— Como digo, eso no lo debatimos, porque lo único que hace es la subcomisión que ha visto la pertinencia de estos decretos es, como digo, el asunto de forma. Si no hay más intervenciones, vamos entonces al voto en bloque de los decretos y tratados.

Señora secretaria técnica, proceda a llamar a los señores congresistas para registrar el sentido de su voto.

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal:

Con su venia, señor presidente, procedemos al llamado de votación, de sentido de votación de los predictámenes de control político que usted hizo referencia.

Rospigliosi Capurro.

El señor ROSPIGLIOSI CAPURRO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Rospigliosi Capurro, a favor.

Aragón Carreño.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Aragón Carreño, a favor.

Camones Soriano.

La señora CAMONES SORIANO (APP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Camones Soriano, a favor.

Aguinaga Recuenco.

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Aguinaga Recuenco, a favor.

Juárez Gallegos.

La señora JUÁREZ CALLE (PP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Juárez Gallegos, a favor.

Moyano Delgado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Moyano Delgado, a favor.

Alegría García (); Lizarzaburu Lizarzaburu (); Elías Ávalos.

El señor ELÍAS ÁVALOS (APP).— Elías Ávalos, a favor, señora secretaria.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Elías Ávalos, a favor.

Calle Lobatón.

La señora CALLE LOBATÓN (PP).— Calle Lobatón, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Calle Lobatón, a favor.

Juárez Calle. El congresista Juárez Calle, manifiesta su voto a favor, a través del chat de la plataforma. Juárez Calle, a favor.

Luna Gálvez.

El señor LUNA GÁLVEZ (PP).— Luna Gálvez, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Luna Gálvez, a favor.

Mita Alanoca.

El señor MITA ALANOCA (PL).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Mita Alanoca, a favor.

Muñante Barrios (); Herrera Medina(); Soto Palacios.

El señor SOTO PALACIOS (AP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Soto Palacios, a favor.

Paredes González.

El señor PAREDES GONZALES (BM).— Paredes Gonzales, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Paredes Gonzales, a favor.

Quiroz Barboza (); Williams Zapata.

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Williams Zapata, a favor.

Tudela Gutiérrez (); Caverro Alva.

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Caverro Alva, a favor.

Cutipa Ccama.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP).— Cutipa Ccama, en abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Cutipa Ccama, en abstención.

Valer Pinto.

El señor VALER PINTO (SP).— Valer Pinto, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Valer Pinto, a favor.

Morante Figari.

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Morante Figari, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Morante Figari, a favor.

Flores Ramírez.

El señor FLORES RAMÍREZ (BS).— Flores Ramírez, a favor. (19)

La SECRETARIA TÉCNICA.— Flores Ramírez, a favor.

Echaíz de Núñez Izaga.

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (HYD).— Abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Echaíz de Núñez Izaga, abstención.

Luque Ibarra.

La señora LUQUE IBARRA (BDP).— Abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Luque Ibarra, abstención.

Segundo llamado a los congresistas titulares que no han respondido el llamado. Alegría García(); Lizarzaburu Lizarzaburu (); Muñante Barrios(); Herrera Medina. La congresista Herrera Medina, manifiesta su voto, a favor, a través del chat de la plataforma. Herrera Medina, a favor.

Quiroz Barboza.

El señor QUIROZ BARBOZA (BM).— Abstención, Quiroz Barboza.

Tudela Gutiérrez.

Se va a proceder a llamar a los señores congresistas accesitarios de los congresistas titulares que no han respondido llamado.

Ventura Ángel(); Barbarán Reyes (); Bustamante Donayre (); Castillo Rivas (); Chacón Trujillo (); Flores Ruíz; Jiménez Heredia(); López Morales (): Obando Morgan (); Revilla Villanueva (); Alva Prieto.

La señora ALVA PRIETO (NA).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Alva Prieto, a favor.

Perdón congresista Alva Prieto, la congresista Camones, ya respondió su llamado. No se considera el voto de la congresista Alva Prieto.

Perdón congresista Alva Prieto, usted aparece como accesitaria también del congresista Lizarzaburu Lizarzaburu, también de la congresista Camones.

Entonces consideramos su voto, a favor, en reemplazo del congresista Lizarzaburu Lizarzaburu. Alva Prieto, a favor.

Bazán Calderón(); Amuruz Dulanto().

Señor presidente, habiendo culminado con el llamado de sentido de votación de los señores congresistas en los predictámenes de control político, se tiene registrado 20 votos a favor, 4 votos en abstención. Los predictámenes han sido aprobados por mayoría.

El señor PRESIDENTE.— Conforme al registro de votos anunciado por la Secretaría Técnica, los predictámenes de control han sido aprobados por mayoría.

Como siguiente punto de agenda, tenemos la sustentación del Proyecto de Ley 10174/2024-CR, que propone la ley que precisa los tipos de Estado Civil y su consignación en el Documento Nacional de Identidad, de autoría de la congresista Lady Camones.

Dejo en uso de la palabra a la congresista Camones, por el tiempo de diez minutos.

La señora CAMONES SORIANO (APP).— Gracias, presidente. Muy buenos días con todos los colegas. Efectivamente, el día de hoy voy a sustentar el proyecto de ley que precisa los tipos de Estado Civil y su consignación en el DNI, en el Documento Nacional de Identidad.

Presidente, esta normativa sobre la materia está regulada en el artículo 183 de nuestra Constitución Política, la misma que establece que el RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es responsable de la inscripción de los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, **(20)** las defunciones y otros actos que modifican nuestro Estado Civil, así también como de la emisión del DNI entre otras funciones.

La Ley 26497 que es la Ley Orgánica del RENIEC, establece que el DNI es una única cédula de identidad personal en la que se debe contener entre otros datos el estado civil de su titular.

Del análisis de toda esta normativa vinculada al RENIEC, respecto al estado civil podemos advertir que esta se relaciona a la existencia de un matrimonio y en base a ello, el RENIEC ha inferido que debe consignarse como estado civil en el DNI cuatro estados, soltero, casado, viudo, divorciado.

Sobre este tema, señor presidente, debo precisar que en nuestro Código Civil no existe ninguna normativa, ningún artículo que establezca de manera taxativa cuáles son los tipos de estado civil para nosotros los peruanos. Precisamente, porque este es un concepto bastante amplio y que en la práctica nos ha llevado a relacionarlo únicamente a la existencia o no de un vínculo matrimonial. Y que todo parte de ello.

Sobre la casuística relacionada que hemos venido evaluando y que nos ha impulsado a presentar este proyecto de ley, vemos que existen casuísticas que personalmente he podido conocer por mi experiencia de trabajo que he tenido en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Yo he sido funcionaria del RENIEC cerca de 18 años. Y conocía que la consignación en el acápite del estado civil en el DNI de divorciado o viudo, en muchos casos se percibe de una forma no positiva, no apropiada para las personas que así lo tienen. Y, por tanto, no contribuye a la configuración de una identidad adecuada. Existen muchas personas que se sienten algo discriminadas o no se sienten cómodas cuando en el DNI se les consigna, sobre todo, el estado civil entre comillas de divorciado.

En otros casos, para otras personas estos datos consideran una afectación a su intimidad y, por lo tanto, mantenerlas de una manera tan pública afectaría de alguna manera ese derecho a la intimidad.

Por otro lado, también debemos precisar, señor presidente, que los datos que deben aparecer en el DNI son los que tienen que ser relevantes y esenciales para los fines de identificación.

Los demás actos que se pueden registrar en el RENIEC y con la tecnología actual que poseen estas instituciones y sobre todo en el RENIEC podrían tener acceso en caso sea necesario, o sea, no se estaría limitando ningún acceso a la información.

Recordemos que la Constitución Política de nuestro país garantiza el derecho a la identidad, pero también a la intimidad como un derecho fundamental de la persona humana, y el cual debe tener normas de desarrollo para que esta se pueda proteger.

Y en este punto, señor presidente, quiero entrar ya al contenido específico del proyecto de ley que he presentado.

Esta propuesta legislativa plantea, por un lado, establecer los tipos de estado civil, o sea, tener ya una norma taxativa que indique cuáles son los tipos de estado civil que tenemos los peruanos, y que estos se configuran a partir de la existencia de un matrimonio civil, y hemos considerado plantear que en el artículo 2 los tipos de estado civil y el estado civil de las personas se generan a partir de la existencia o inexistencia de matrimonio civil, siendo de los siguientes tipos:

- A. Soltero, y,
- B. Casado.

En el artículo 3 del proyecto de ley proponemos que en el DNI solamente deben figurar el estado civil del soltero o casado, y en caso se produzca un divorcio o el fallecimiento del cónyuge el estado civil pasaría a ser soltero, dado que el vínculo matrimonial ya no es existente o ha concluido.

En ese sentido, planteamos el artículo 3 como consignación del estado civil en el DNI. El DNI respecto al estado civil consignará soltero o casado según corresponda. En caso se produzca una ruptura del vínculo matrimonial, fallecimiento de uno de los cónyuges o invalidez del matrimonio, el estado civil será modificado a soltero. Es decir, cuando ya nosotros nos divorciamos no vamos a consignar en nuestro DNI o no lo vamos a declarar como estado civil divorciado, sino una vez culminado este vínculo matrimonial, volvemos a ser solteros. Lo mismo en el caso de viudez. Si nuestro cónyuge fallece, no vamos a tener el estado civil de viudo, sino regresamos a ser solteros.

De otro lado, en el artículo 4 se precisa que el divorcio o fallecimiento del cónyuge o la invalidez del matrimonio son actos registrales, es decir, deben registrarse siempre y aparecerán en la ficha RENIEC, pero ya no en el DNI, dado que no constituye un estado civil. O sea, esa información va a estar consignada en los registros del RENIEC.

La problemática que también se presenta, señor presidente, es que, al incluir divorciado o viudo en los DNI, puede generar, como ya lo dije, estigmas sociales que afecten la autoestima de quienes consideran o quienes tienen contra este estado. **(21)** Las relaciones interpersonales también se verían afectadas, limitando el desarrollo pleno del proyecto de vida de unas personas, influyendo negativamente en algunos casos en la personalidad, en la imagen o sus interacciones dentro de nuestra sociedad.

En el ámbito de las oportunidades laborales, el dato divorciado o viudo en el DNI podría generar prejuicios, llevando también en algunos casos a empleadores a percibir que estos candidatos pueden tener menos estabilidad o tener quizás mayores cargas familiares. Esto podría traducirse en discriminación y en la reducción de oportunidades laborales, afectando incluso su

acceso al empleo, incluso antes de ser evaluados por sus capacidades.

Sobre el análisis costo beneficio de este proyecto, planteamos que clarifica las normas respecto al tratamiento del estado civil, contribuyendo a contar con un marco normativo apropiado para las personas en esta materia. O sea, ya tendríamos una norma taxativa que declare cuáles son el estado civil que corresponden y lo que nosotros planteamos que sean solamente dos, casado o soltero.

Además, contribuye a materializar los derechos fundamentales a la identidad y, sobre todo, a la intimidad de las personas. Puede contribuir, además, a erradicar situaciones que perjudiquen las relaciones interpersonales y la discriminación en el ámbito laboral o de las oportunidades laborales.

En ese sentido, señor presidente, señores colegas congresistas, mi experiencia en el RENIEC me ha permitido conocer que los cambios que se proponen son muy relevantes para muchísimas personas, y amerita plantear una ley que pueda dar solución a esta problemática. En apariencia es sencilla, pero que contiene y está relacionada a derechos fundamentales que como Estado y sobre todo como Congreso debemos proteger y materializar en beneficio de todos nuestros ciudadanos peruanos.

Estoy segura, señor presidente, que vamos a contar con un voto favorable una vez se cuente con el dictamen respectivo.

He concluido, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Si algún congresista desea realizar preguntas o comentarios al respecto pueden solicitar el uso de la palabra.

Si no hay intervenciones, agradecemos la participación de la congresista Lady Camones, quien ha sustentado su proyecto en el marco de lo establecido en el primer párrafo del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.

El proyecto sustentado continuará con el trámite correspondiente.

Ahora, como siguiente punto de la agenda, tenemos la sustentación del Proyecto de Ley 9617-2024-CR, que propone la ley que precisa que las dietas de los consejeros regionales se rijan por lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales de autoría de la congresista Silvana Robles.

Dejo en el uso de la palabra a la congresista Robles por espacio de diez minutos.

Adelante.

La señora ROBLES ARAUJO (BS)..- Le agradezco a vuestra presidencia haber agendado este importante proyecto de ley, cuyo título es ley que precisa que las dietas de los consejeros regionales se rijan por lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Si bien se ha identificado plenamente el problema, existe a la actualidad un conflicto normativo en la regulación de dietas para los señores y señoras consejeros regionales.

En principio, se cuestiona el principio, valga la redundancia de jerarquía normativa, una ley ordinaria, que es la Ley 28212, establece criterios que contradicen lo dispuesto por una ley orgánica que vendría a ser de mayor jerarquía.

Dentro de la contradicción tengo este cuadro que considero muy relevante. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 19, literal A, limita el monto de la dieta mensual a 1.5 Unidades Impositivas Tributarias. La Ley 28212 establece un límite del 30% de la remuneración mensual del gobernador regional que permite a los consejeros regionales fijar dietas según su ley orgánica, pero introduce un límite contradictorio. **(22)**

¿Cuál es la solución que brinda esta propuesta legislativa? Retirar el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley 28212 a los consejeros regionales, lo que implica que sus dietas no estén limitadas a un monto no mayor del 30% de la remuneración del gobernador regional, sino a una y media, o sea 1.5 UIT, como dispone la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Para ello, se tendría que adicionar el numeral 5.3 al artículo 5 de la Ley 28212 precisando que los consejeros regionales perciben dietas de conformidad con lo establecido en el literal A del artículo 19 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

¿Cuál es el costo beneficio de esta propuesta legislativa? Primero, que restablece la vigencia de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en materia de fijación de las dietas de los consejeros regionales.

La aplicación de la norma orgánica implicará una mayor demanda de recursos financieros del gobierno regional, recursos que serán sufragados con sus propios ingresos.

La iniciativa se soporta en el presupuesto institucional de los gobiernos regionales, reproduce un inobjetable beneficio en materia de debida vigencia del ordenamiento jurídico normativo.

La fijación de las dietas por el Consejo Regional debe sujetarse a su ley orgánica. ¿Cuál es el impacto jurídico de esta iniciativa? La virtud de esta iniciativa reside en que permite el restablecimiento de la aplicación de una norma de mayor jerarquía que, sin haber sido derogada ni modificada no es aplicable, porque una ley ordinaria de inferior jerarquía ha

establecido criterios distintos para la fijación del monto de las dietas de los consejeros regionales.

La vinculación de la iniciativa con las políticas del Acuerdo Nacional. La iniciativa se alinea con la siguiente política del Estado del Acuerdo Nacional, Política 24, la afirmación de un Estado eficiente y transparente. Esto garantiza la vigencia del Estado constitucional de derecho y la irrestricta sujeción a los principios generales del derecho, entre ellos el de jerarquía normativa.

Es todo en cuanto a la sustentación de esta importante iniciativa legislativa, que espero se predictamine en vuestra comisión.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Si algún congresista desea hacer uso de la palabra para realizar pregunta o comentario respecto a la sustentación que ha hecho la congresista Silvana Robles, tiene el uso de la palabra.

Si no hay intervenciones, agradezco la participación de la congresista Silvana Robles, quien ha sustentado su proyecto en el marco de lo establecido en el primer párrafo del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.

El proyecto sustentado continuará con el trámite correspondiente.

El señor ELÍAS ÁVALOS (APP).— Señor presidente, José Luis Elías, un minuto por favor, una segunda interrupción.

El señor PRESIDENTE.— Sí, adelante, congresista Elías.

El señor ELÍAS ÁVALOS (APP).— Gracias, señor presidente.

Yo quiero agradecerle valores lo que le voy a pedir. El Proyecto de Ley 639/2021 de mi autoría presentado el 4 de noviembre de 2021 versa exactamente, excepto las modificaciones de senadores y diputados con el Proyecto 10485/2024 del congresista Aragón.

Me gustaría después que sustente el señor Aragón me dé usted tres minutos para sustentar el mío que tiene 1228 días, señor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Atendiendo el proyecto de ley del congresista Elías 639, guarda relación con el proyecto del congresista Aragón. También se autoriza la sustentación del congresista Elías.

El siguiente punto de la agenda es precisamente la sustentación del Proyecto 10485, que propone la ley que modifica la forma de elección del Parlamento Andino, con el fin de que el Senado designe a sus miembros, del congresista Luis Aragón. **(23)**

Dejo en uso de la palabra al congresista Aragón por diez minutos.

Adelante.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Gracias, señor presidente.

Agradecer a usted por la posibilidad de sustentar ese proyecto de ley y a todo el equipo de asesores e integrantes de la Comisión de Constitución.

Efectivamente, señor presidente, el Proyecto de Ley 10485, ley que modifica la forma de elección del Parlamento Andino, con el fin de que el Senado de la República designe a sus integrantes.

Siguiente.

La presente iniciativa, señor presidente, tiene por objeto modificar, no es sino la forma de elección de los parlamentarios andinos. Esta se realiza con la finalidad de que la Cámara de Senadores que sea elegida el próximo año, el año 2026, sea quien designe y o elija a los parlamentarios andinos entre sus miembros, entre sus integrantes, para que ejerzan dicho cargo en adición a sus funciones como senadores de la República.

En ese sentido, se propone que los miembros de la Cámara de Senadores designen, señor presidente, a cinco representantes del Parlamento Andino entre los integrantes del Senado de la República, para lo cual fórmula que la designación se desarrollará mediante votación secreta, secreta de los senadores que sean elegidos el próximo año, en la primera sesión de la Cámara de Senadores que no puede postergarse más allá de un mes de asumidas sus funciones bajo responsabilidad constitucional.

Siguiente.

Del mismo modo, se precisa, señor presidente, que los senadores elegidos como Parlamentarios Andinos desempeñen la función en adición a sus funciones como senadores, sin demandar personal adicional de asesores, trabajadores, oficinas u otro gasto que no sea justificado por el Congreso de la República.

También se estimula que los senadores elegidos como Parlamentarios Andinos tengan licencia, si les pueda otorgar la licencia respectiva, de las sesiones de los órganos deliberativos del Congreso cuando realicen las funciones como Parlamentarios Andinos.

La propuesta, señor presidente de la Cámara de Senadores, a efectos de que elige entre sus miembros a los Parlamentarios Andinos, obedece a dos factores.

Primero, la necesidad de reducir los gastos que genera en la actualidad el Parlamento Andino. El Parlamento Andino cuenta con un despacho parlamentario, con dos asesores, dos técnicos, dos auxiliares, aproximadamente seis o siete personas que forman parte del despacho de cada Parlamentario Andino, y la verdad, señor presidente, esto nos generaría un ahorro al erario nacional.

Si nosotros revisamos y estamos solicitando, señor presidente, a migraciones y a las entidades respectivas el reporte de viajes de todos los Parlamentarios Andinos existentes a la fecha. No tenemos nada en contra de ellos, nada personal. Pero ¿cuáles son los resultados prácticos? ¿Cuáles son los beneficios si un Parlamentario Andino no puede fiscalizar? ¿Un Parlamentario Andino no puede legislar? Un Parlamentario Andino, señor presidente, con todo su equipo de asesores, no da un informe mínimamente al Parlamento Nacional, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Ministerio de Relaciones Exteriores, ni siquiera a los electores que los han elegido.

Ellos no hacen una semana de representación donde nosotros como parlamentarios y seguramente también serán los diputados y los senadores el próximo año, tienen que realizar un Informe, tenemos que realizar un Informe de semana de representación.

Entonces, los gastos, señor presidente, y lo podemos documentar con más detalle a su despacho, son innecesarios y son cuantiosos respecto a los gastos tanto del equipo de asesores, técnicos, repito y los mismos parlamentarios.

Tengo que decirlo, va a generar alguna controversia, estamos en democracia y podemos discrepar, pero vemos una poca efectividad de sus funciones, que tranquilamente pueden ser asumidas por los miembros del Senado de la República, señor presidente. **(24)**

En tal sentido, -siguiente- como antecedentes tenemos que, si bien es cierto, el año 1969 los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena, mediante el cual se crea el Pacto Andino, el año 1979 después se crea el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y del Tribunal Andino. Y ese mismo año se suscribe, sí, el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, como un órgano deliberante y representante de los pueblos andinos.

Es así que de conformidad con el artículo 41 del Acuerdo de Cartagena el Parlamento Andino es un órgano supranacional y democrático de la Comunidad Andina de Naciones, y tiene como misión armonizar las leyes de la región, garantizar la participación ciudadana, fortalecer la integración andina, latinoamericana, etcétera, etcétera.

Siguiente.

¿Por qué la necesidad, presidente, de modificar la elección de los Parlamentarios Andinos en relación a que las funciones que desarrollan no generan un beneficio directo al Estado?, dado que, a diferencia de los congresistas, estos no tienen, repito, iniciativa legislativa, no son integrantes de las comisiones ordinarias, incluso muchas de sus funciones, presidente, están siendo ya superpuestas por las Ligas Parlamentarias y las Ligas Parlamentarias en el Congreso de la República, que son espacios de colaboración entre parlamentos de diferentes países.

También genera el deber que impone el Estado a todos los ciudadanos para elegir a los Parlamentarios Andinos en las elecciones generales.

Bueno, en realidad, presidente, entre otros problemas que se originan de la elección universal de los Parlamentarios Andinos. Es la confusión que genera los votantes, que no sólo tienen que elegir al presidente.

Ya sabemos, presidente, que nuestras cédulas van a ser amplias, ampulosas. Y eliminando el Parlamento Andino también facilitaríamos a que la cédula de votación sea una cédula más digerible y algo más sencilla, porque eliminaríamos toda la columna de la primera cédula de votación, donde actualmente está la fórmula presidencial, los Senadores de Distrito Único y el Parlamento Andino y toda esa columna se eliminaría.

Estamos a tiempo, porque todavía tenemos un mes prácticamente, o menos de un mes, para hacer estas reformas en la Comisión de Constitución y en el Pleno.

Estoy resumiendo, señor presidente, por el tiempo que nos ha dado.

Quiero también manifestar, presidente, que, si nosotros leemos, y estoy seguro que lo hemos hecho, la Constitución Política del Estado en ningún articulado de la Constitución Política del Estado nos habla sobre los Parlamentarios Andinos, en ninguno. Incluso en el artículo 39, cuando nos habla de la función pública, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía al servicio de la nación y en ese orden los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del TC, Junta Nacional de Justicia, Magistrado Supremo, Fiscal de la Nación, Defensor del Pueblo, etcétera, no se menciona en ningún artículo, ninguna línea a los señores miembros del Parlamento Andino.

En tal sentido, presidente, también quiero manifestar -siguiente- que existe un artículo 42 del Acuerdo de Cartagena, porque algunos pueden decir, existe un Tratado Internacional, pero el artículo 42 de este Acuerdo de Cartagena, ¿qué nos dice? El Parlamento Andino es el órgano deliberante del sistema, su naturaleza es comunitaria, representa a los pueblos de la comunidad indígena, correcto, y estará constituido por representantes elegidos por sufragio universal y directo. Pero los senadores, ¿acaso no serán elegidos mediante sufragio universal y directo? Por supuesto, van a ser elegidos por sufragio universal y directo, igual que la Cámara de Diputados.

Entonces, ahí está. El mismo artículo 42 da esa posibilidad. En tanto, se suscribe el protocolo adicional que instituye a la elección directa, el Parlamento Andino estará conformado por representantes de los Congresos Nacionales. Lo dice el mismo

artículo 42 de la Acuerdo Cartagena. Y ese protocolo adicional, si bien es cierto, ya ha sido dado, señor presidente, pero también en su primera disposición transitoria nos dice, en los países en los cuales aún no se han realizado los procesos de elecciones directas para elegir sus representantes al Parlamento Andino, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo adicional de sus representantes, los Congresos de dichos países designarán entre sus parlamentarios nacionales. Lo dice el protocolo adicional del Acuerdo de Cartagena. Los Congresos que tuvieran sistemas Bicamerales designarán a sus representantes de ambas cámaras, perdón, dos por la Cámara Alta y tres por la Cámara Baja, segunda disposición transitoria, presidente.

Entonces, hay una base legal del mismo Acuerdo de Cartagena y de su protocolo adicional.

Entonces, presidente, para ir finalizando, tenemos que interpretar de esa manera el artículo 42.

Siguiente diapositiva. **(25)**

Y yo sé, presidente, que es una medida que va a generar controversia, oposición, el interés de mucha gente de postular al Parlamento Andino de los diferentes partidos políticos, pero tiene que primar el interés público, el interés de la nación, no el interés personal de cada uno de los partidos políticos, pero ahorita ya hay varios, que yo quiero ser el uno del Parlamento Andino, yo quiero ser el dos. Presidente, eso no tiene que primar, tiene que primar el interés nacional.

Y finalizo, presidente, solo con un dato. Bueno, he recibido una llamada telefónica, pero a esta hora no, pues no.

En fin, sobre el tema, señor presidente, en el caso de Colombia. Actualmente la Ley Estatutaria 1729 del año 2014, por la cual se deroga la Ley 1157 en el mismo Colombia se deroga una ley por la cual se desarrolla, bueno, el artículo 200.

Bueno, esta ley, presidente, ¿qué hace en Colombia que es la sede del Parlamento Andino? El año 2014 Colombia derogó la ley que permitía que se elija en elección a los Parlamentarios Andinos en elección directa. En la misma sede del Parlamento Andino, actualmente el Congreso de la República de Colombia, ellos son quienes eligen a los Parlamentarios Andinos. No hay una elección como hacemos en Perú y en otros países también al respecto.

Señor presidente, en tal sentido solicito el dictamen respectivo y la última disposición complementaria significa que se derogaría la Ley 28360, Ley de Elecciones Representantes ante el Parlamento Andino.

En fin, señor presidente, reitero mi agradecimiento, hemos un poco ajustado por permitirme sustentar la siguiente iniciativa. Creemos que tiene una base legal, una base constitucional, una

base social y obviamente estamos a tiempo todavía, porque en realidad estamos todavía a menos de 30 días, pero estamos a tiempo antes de la fecha máximo para la convocatoria a Elecciones Generales.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Aragón.

Tiene la palabra el congresista Elías.

El señor ELÍAS ÁVALOS (APP).— Muchas gracias, presidente, gracias, congresista Aragón.

El Proyecto de Ley 0639/2021 debe acumular al Proyecto 10485/2024 del congresista Luis Ángel Aragón, si es que no se opone. El mío es 639/2021, dicen casi exactamente lo mismo. En mi caso, yo lo presenté antes de la reforma bicameral por supuesto.

Por eso, estoy pidiendo que derogue la Ley 28360 Ley de Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino, pública el 14 de octubre de 2004.

Colombia y Chile, voy a hablar de estos dos países que están en el Pacto Andino. Colombia, en su artículo 227 de su Constitución, señala: La ley podrá establecer elecciones directas para la conformación del Parlamento Andino.

Colombia, en el año 2007 en su Ley 1157, desarrolla lo establecido en el artículo 227, que se elegirá en forma directa a cinco representantes ante el Parlamento Andino.

Colombia, en el año 2014 en su Ley 1729 deroga la Ley 1157, mientras establece régimen electoral uniforme en el marco de la comunidad andina.

Colombia elegirá a sus representantes, dice su ley, al Parlamento Andino con dos representantes elegidos por el Senado de la República. Tres representantes elegidos por la Cámara de Representantes, va a ser la Cámara de Diputados, por el plazo de cinco años. Votación secreta por cada una de las cámaras.

Chile, Chile, todas las representaciones en el Pacto Andino se dan en el acuerdo marco para instancias internacionales sobre la base de la representación de cada cámara decisoria, decisión política de acuerdos políticos en Chile.

Chile no tiene legislación especial para elegir a los representantes, tiene Acuerdo Político. En Chile quien tiene más representantes elegidos tiene un mayor porcentaje dentro de los cinco que van a ser designados por ellos.

Ni Colombia, ni Chile tienen elección y tampoco la Comunidad Andina los denunció, como estaban conversando acá. Nos va a denunciar la Comunidad Andina. La Comunidad Andina funciona

gracias a Dios, por la forma autónoma que ellos eligen en sus votaciones.

Nosotros tenemos la autonomía para poder decidir cómo elegimos. Si deciden los señores senadores por elegir a dos, sería la propuesta dos elegidos dentro de los senadores elegidos el año 2026 y tres diputados elegirían a otros tres representantes ante el Parlamento Andino. **(26)**

No estamos diciendo que se anule el Parlamento Andino. La verdad, las decisiones que toman ellos son decisiones muy caseras, no tienen mandato en ningún país, ni siquiera de los proponentes.

El Estatuto Electoral Andino que prevea la forma cómo se elige al parlamentario andino no ha sido aprobado, en cada país hay formas de hacer las elecciones, tenemos la libertad de aprobar nuestra forma de elecciones.

En ese mismo orden de ideas presenté el Proyecto de Ley 7337, del 18 de marzo de 2025, proponiendo el Reglamento del Senado, actualmente vigente a partir del 2026; igualmente el Reglamento de la Cámara de Diputados y el Reglamento del Congreso vigente a partir del año 2026.

Señor presidente, considero que, a tenor de los antecedentes de los dos miembros del parlamento andino, Colombia y Chile, el Perú puede elegir a dichos cinco representantes dentro del Senado y la Cámara de Diputados. Quiero referirme cuál es el costo que significa, ya lo dijo el congresista Aragón, para el presupuesto del Congreso de República.

Esto ya está en el Congreso de República, en el presupuesto del Congreso, son más de 30 personas que tienen los cinco representantes, seis cada uno, que viajan a muchos lados, y que la verdad no hay una recomendación que pueda ser atendida, creo que por ninguno de los países miembros.

Gracias, presidente, muchas gracias por la oportunidad.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Elías.

Si algún congresista desea hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez.

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— Gracias, presidente.

Con relación a la propuesta planteada por los congresistas que me han antecedido, quería señalar que el Parlamento Andino es un órgano deliberante de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN, y es uno de los esfuerzos más importantes de la región. Creo que ha hecho un trabajo de integración, y esto es algo que tenemos que reconocer.

La forma de elección de los representantes del Parlamento Andino se establece en el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino y

protocolos adicionales, así tenemos que el protocolo modificadorio que crea la Comunidad Andina y establece el sistema andino de integración, el protocolo de Trujillo, establece en su artículo 42 que los representantes del Parlamento Andino son elegidos por sufragio universal y directo.

Asimismo, el Acta de San Francisco de Quito del año 2004, señala expresamente en el Fundamento 42 que: *Exhortamos a los congresos nacionales de los países miembros que aún no lo han ratificado, hacerlo en el más corto plazo posible, de modo que se realicen las elecciones directas y universales de los representantes ante el Parlamento Andino en los procesos electorales que estén próximos a ejecutarse.*

Y es por estas razones, presidente, que desde ese momento se elige a los parlamentarios andinos en elecciones generales, para cumplir las funciones específicas que están en los tratados.

Por eso es que no se encuentra en la Constitución como señalan algunos de los congresistas que me han antecedido. La forma de elección propuesta en los proyectos de ley son formas de elección indirecta, a través del Senado, por lo que una medida de dicha naturaleza colisiona con los acuerdos internacionales mencionados.

En tal sentido, presidente, lo que se requiere es que se busque una alternativa viable y que la Comisión, lo que puede hacer antes de emitir un dictamen, es solicitar una opinión al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Poder Ejecutivo, así como a expertos en Derecho Internacional y Derecho Comunitario para evaluar esta propuesta.

Y es pertinente también tener en cuenta la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que señala que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

Es por eso que el Parlamento Andino existe desde el momento en el que el Perú realmente suscribe este tratado constitutivo (27) del Parlamento Andino y funciona de esta manera, porque –constitucionalmente– nosotros, las normas relativas y que han sido ratificadas tienen que ser de aplicación obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Juárez.

Si algún otro congresista desea hacer uso de la palabra.

El señor VALER PINTO (SP).— El congresista Valer, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Adelante, congresista Valer.

El señor VALER PINTO (SP).— Muchísimas gracias, presidente.

El Parlamento Andino, presidente, en principio no es un poder político, es una institución deliberante, presidente. Fue creado prácticamente por impulso de la Cepal en 1960, y en 1966 aparece primero con el término de Pacto Andino en las que estuvieron como fundadores los estados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Chile se retiró en 1976 y Venezuela también ya no es parte de la Comunidad Andina porque se retira en el año 2006, aproximadamente.

Presidente, yo creo que la fundamentación que ha hecho del proyecto de ley el congresista Aragón, seguido del congresista Elías, es contundente. Este Parlamento Andino, al no ser un poder político y solo ser un órgano político deliberante, es verdad, tiene actas, es verdad que tiene una constitución internacional, pero al no ser un instrumento vinculante a los poderes supranacionales y nacionales, simplemente deviene en una institución que recomienda con un gasto presupuestal exorbitante.

Razón por la que creemos, presidente, que durante las consultas que se hagan, tanto a la Cancillería y a otros órganos internacionales si se quiere, posiblemente recomendarán que el Congreso de la República decidirá el modo y forma de elección; y la elección de los cinco miembros integrantes de cada país que hacen miembro, pues fácilmente se puede elegir a con voto universal, secreto y obligatorio al interior de cada cámara, en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, y de ahí saldrán los que representen al pueblo del Perú, con la finalidad de que este órgano internacional siga funcionando, ojalá, hasta que alcance su meta, que es la unidad sudamericana, y dentro de ello un solo mercado y también una sola moneda.

Ojalá, pero mientras tanto, presidente, yo estoy de acuerdo con la fundamentación de que este es un gasto insulso que genera al Estado peruano; y, por tanto, debería ser electo por cada una de las cámaras del Congreso de la República; y, esperando, que el dictamen que oportunamente se elaborará por esta comisión vaya en ese sentido, y estaremos atentos al debate en su debido momento.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Valer.

Tiene la palabra el congresista Elías.

El señor ELÍAS AVALOS (APP).— Gracias, presidente.

Por su intermedio, a mi amiga Patricia Juárez, no está en discusión la labor del Parlamento Andino, lo que está en discusión es no solo el presupuesto que se cobija en el presupuesto del Congreso de la República, sino en lo que estamos, el Congresista Aragón y yo, es la forma como se eligen.

Colombia y Chile nunca han sido castigados, por si acaso, jamás. Se separó Chile creo que 10 años, luego de 10 años volvió sin ningún problema. Entonces, yo creo que los parlamentos de Colombia y Chile deberían también ser consultados. Conforme lo solicita la congresista Juárez, pido que también se consulte a los parlamentos de Colombia y Chile sobre la forma de designación o elección, **(28)** porque votan los senadores y votan los diputados, ahí hay elección, se cumple con la palabra elección.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Elías.

Si no hay ninguna otra intervención, se agradece la participación de los congresistas Aragón y Elías, quienes han sustentado sus proyectos en el marco de lo establecido en el primer párrafo del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. Los proyectos sustentados continuarán con el trámite correspondiente.

No habiendo otros puntos que tratar, se consulta la dispensa de trámite de sanción del Acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión.

Si no hay oposición, se da por aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:16 h, se levanta la sesión.

Muchas gracias.

—A las 12:16 h, se levanta la sesión.